

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

Al escrito folio 183871: estese al mérito de autos.

Vistos:

En estos antecedentes RIT N° 132-2021 y RUC N° 1901143547-8, del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, por sentencia de siete de noviembre de dos mil veintiuno se condenó al acusado **JAIME DAVID JOFRÉ ITURRA**, a la pena única de ochocientos diecisiete días de reclusión menor en su grado medio, más accesorias legales, como autor de dos cuasidelitos de homicidio, ilícito descrito y sancionado en el artículo 490 N° 1 del Código Penal, en relación al artículo 492 y 391 N° 2 del mismo cuerpo legal, cometidos en perjuicio de Verónica Rivera Venegas y Antonella Fuentes Rivera y un cuasidelito de lesiones graves, ilícito descrito y sancionado en el artículo 490 N° 2 del Código Penal, en relación al artículo 492 y 397 N° 2 del mismo cuerpo legal, cometido en perjuicio de José Fuentes González, hecho cometido el día 22 de octubre de 2019, en la comuna de Rancagua.

Contra este fallo, la defensa del acusado dedujo recurso de nulidad, que fue declarado admisible y se ordenó pasar estos antecedentes al señor Presidente para que fijase audiencia con el objeto de conocerlo.

Se conoció el recurso en la audiencia pública del treinta de septiembre pasado, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, en forma principal, el recurso interpuesto se sustenta en la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por vulneración de los derechos a conocer de manera específica y clara los hechos atribuidos, a ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación, y a guardar silencio, porque el acusado, en el sitio del suceso, y ya teniendo la calidad de



imputado, es interrogado por los funcionarios policiales, sin previa lectura derechos y sin asistencia de abogado;

2º) Que en subsidio de la anterior, deduce conjuntamente las causales de las letras b) del artículo 373 del Código Procesal Penal y e) del artículo 374 en relación al artículo 342 letra c) del mismo código.

Respecto de la causal de la letra e) del artículo 374, reclama que la sentencia atribuye a la conducta del acusado la voluntad de infringir el deber de cuidado y pasar con luz roja, sin hacerse cargo, ni explicar conforme a las reglas lógicas, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente aceptados, que la acción reprochada y exigida por el sentenciador al conductor no era posible de realizar; mientras que sobre la causal de la letra b) del artículo 373, señala que la sentencia hizo una errónea aplicación de los artículos 104, 108, 166, 199 y 200 de la Ley del Tránsito y 2º, 15º, 391 N° 2, 397 N° 2, 490 y 492 del Código Penal, al acreditar y justificar tanto los delitos culposos de homicidio y de lesiones graves mediante la aplicación errónea de la relación de causalidad al fundarse en una causa basal del hecho errónea e incompleta;

3º) Que el recurrente solicita por ambas causales, se anule el juicio y la sentencia impugnada, retrotrayendo el estado del procedimiento a la fijación de nuevo día para la celebración de un nuevo juicio oral, y disponga la remisión de los autos al Tribunal no inhabilitado que corresponda;

4º) Que la sentencia impugnada tuvo por demostrados los siguientes hechos: *“Que el día 22 de octubre del 2019, aproximadamente a las 18:30 horas, el acusado Jaime David Jofré Iturra conducía el vehículo bus interprovincial, marca Volvo, placa patente GTVB-13, por la ruta Travesía en el kilómetro 80 de la comuna de Rancagua, varios metros antes de llegar a la intersección enfrentó un semáforo en luz roja, a la altura del Shopping Punta del Sol, y pese a ello no detuvo el vehículo, no desaceleró, no frenó y continuó avanzando hacia el cruce regulado por semáforo, ingresando a aquel y colisionando al automóvil marca Kia*



Rio 4, placa patente GLTK-48, que iniciaba el cruce con luz verde en dicha intersección.

Que a consecuencia de dicha colisión resultó politraumatizado con lesiones graves el conductor del vehículo placa patente GLTK-48 don José Eduardo Fuentes González y fallecieron doña Verónica del Carmen Rivera Venegas y la niña doña Antonella Pascal Fuentes Rivera, ambas politraumatizadas.”

Estos hechos fueron calificados por la sentencia impugnada como dos cuasidelitos de homicidio, uno en la persona de Verónica Rivera Venegas y otro en la persona de Antonella Fuentes Rivera, ilícito previsto y sancionado en el artículo 490 N° 1 del Código Penal, en relación al artículo 492 y 391 N° 2 del mismo cuerpo legal; y, un cuasidelito de lesiones graves en perjuicio de José Fuentes González, ilícito previsto y sancionado en el artículo 490 N° 2 del Código Penal, en relación al artículo 492 y 397 N° 2 del mismo cuerpo legal;

5°) Que sobre la causal principal del recurso de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, ya explicada, su adecuada resolución demanda recordar que como esta Corte ha resuelto uniformemente, el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (SCS Roles N°s 2.866-2013 de 17 de junio de 2013; 4.909-2013, de 17 de septiembre de 2013; 21.408-2014, de 8 de septiembre 2014; 28.109-2018,



de 4 de febrero de 2019; 21-2019, de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; y, 14.749-2020, de 10 de marzo de 2020, entre otras), situación que no se ha advertido en la especie, toda vez que el recurrente no ha explicado ni detallado cuál fue el contenido de la declaración prestada por el acusado a los funcionarios policiales, según su versión, sin lectura de derechos y sin asesoría letrada, por lo que no es posible afirmar, primero, que haya aportado información incriminatoria, segundo, que la misma no haya sido incorporada al juicio oral por otros medios probatorios y, tercero, que sus dichos hayan servido de sustento a la decisión condenatoria.

En ese contexto no resulta posible concluir que el interrogatorio del acusado, de haber efectivamente existido y llevarse a cabo en las circunstancias que esgrime el recurrente, constituya una infracción “sustancial” a algún derecho fundamental del acusado, extremo sin el cual la causal invocada no puede prosperar;

6°) Que sobre las causales deducidas subsidiaria y conjuntamente, de las letras b) del artículo 373 y e) del artículo 374, ambos del Código Procesal Penal, no pueden ser acogidas, desde que resultan incompatibles y excluyentes.

En efecto, la causal de la letra b) del artículo 373 supone, necesariamente, aceptar los hechos fijados por la sentencia impugnada, y sólo controvertir la correcta aplicación del derecho a esos hechos, motivo por el cual, de ser acogida en este caso, únicamente es factible anular el fallo y dictar sentencia de reemplazo basándose en los acontecimientos no discutidos. En cambio, por la causal de la letra e) del artículo 374, se controvierte precisamente el establecimiento de esos hechos, de manera que de ser acogida, debe anularse el juicio y la sentencia y proceder nuevamente a celebrar el juicio oral.

Por lo dicho es que las causales deducidas no pueden operar conjuntamente, porque una supone aceptar los hechos fijados y la otra objetarlos



y, además, dar lugar a una supone mantener la validez del juicio mientras que la otra su nulidad.

Las razones anteriores obstan para siquiera entrar al estudio de las alegaciones de fondo planteadas en el recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 372, 373 letras a) y b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA EL RECURSO DE NULIDAD** deducido por la defensa de **JAIME DAVID JOFRÉ ITURRA**, contra la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, en la causa RIT N° 132-2021 y RUC N° 1901143547-8, y contra el juicio oral que lo antecedió, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

Rol N° 90915-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y los Abogados Integrantes Sras. Pía Tavorari G y Ricardo Abuaud D. No firman el Ministro Suplente Sr. Muñoz P. y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia, el primero y, por estar ausente, el segundo.



En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

